



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ACUERDO del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, por el que emite el **“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS”**.

MANUEL ALONSO GARCÍA, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, con fundamento en los artículos 21, noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 17, fracción XV, 19, 20, 24, 27, 48, fracciones II, III, IV, V, XI, XXII, XXXV y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, fracción II, 17, fracciones III, IV, V, XV, XVII y XIX de la Ley de Seguridad Pública; 1, 3 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, y:

CONSIDERANDO

El actuar de las Instituciones de Seguridad Pública se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 21, párrafo noveno, lo que hace necesario establecer el marco legal para la coordinación y desarrollo operativo respecto de las labores cotidianas que realizan los operadores de la materia.

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la misma y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece; considerando que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; que el artículo 4 de la Carta Magna establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley; de acuerdo al artículo 21 de nuestro máximo ordenamiento jurídico, la investigación de los delitos



corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Con fundamento en el artículo 17, fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, el Gobernador cuenta para el despacho de los asuntos que le competen, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la cual tiene entre otras atribuciones la de realizar las funciones de prevención y reacción dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas; prevenir la comisión de los delitos, a través del Secretario de Seguridad Pública, quien a su vez cuenta con el cuerpo de seguridad pública estatal y las unidades administrativas que integran la Secretaría para el cumplimiento de sus funciones.

Por lo anteriormente expuesto y derivado de las atribuciones que me confiere el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, me encuentro facultado para ejercer el mando directo de la Policía Estatal, de igual forma, para emitir los documentos normativos que en el ámbito de mi competencia se requieran para el mejor funcionamiento de la Secretaría; en consecuencia expido el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.

La emisión de este protocolo da cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres al Gobierno del Estado de Puebla, respecto a las alertas de violencia de género contra las mujeres emitidas en diversos Municipios del Estado de Puebla.

El PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS, surge por la necesidad de abordar de manera eficaz el tema y lograr erradicar las



conductas que han ocasionado dicho problema de índole social; entendiendo que para alcanzar el objetivo, es necesario que exista una estrecha comunicación y colaboración entre las diversas dependencias que conforman el Gobierno del Estado de Puebla.

De acuerdo al estudio realizado para el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el número de víctimas de trata de personas en México, al año 2016, se estima en 500,000 casos, de los cuales alrededor de 70,000 son menores de edad sujetos a explotación sexual.

Cada año, alrededor de 21,000 menores de edad son captados por las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y 45 de cada 100 son niñas indígenas; añade que 93% de las víctimas de trata de personas en México son mujeres y 26% menores de edad.

El mismo estudio, destaca que alrededor de 45.4% de las víctimas son captadas por una persona conocida, 49.1% por desconocidos y 5.5% por miembros de la delincuencia organizada; México está catalogado como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. De acuerdo con estimaciones de la PGR, en México existen 47 grupos de delincuencia organizada involucrados en la trata de personas.

Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertan acerca del mayor riesgo de las mujeres y las niñas de ser víctimas de trata, debido a que ellas sufren discriminación por razones de género, el machismo, la cosificación sexual, así como la violencia, además de que existen prácticas culturales que promueven la venta y explotación de las mujeres.

En mérito de lo anterior, en el presente instrumento se establecen políticas institucionales de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla para la prevención y erradicación de la trata de personas en el Estado de Puebla.

DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS

La Organización de las Naciones Unidas definen la trata de personas como: *la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a amenazas, al uso de la fuerza y otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de*



vulnerabilidad, a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Es importante resaltar que la trata no sólo se refiere a la explotación sexual, sino que también se presenta en casos de explotación laboral o de la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes de una persona víctima de trata.

En la actualidad, el problema de la trata de personas es mundial y se estima que cobra unas 800,000 víctimas por año.

La trata de personas es un fenómeno muy antiguo que atenta contra los derechos humanos. Desde hace cientos de años, mujeres y niñas han sido separadas de sus lugares de origen y comercializadas como mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales.

ANTECEDENTES

CONVENCIÓN PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA EXPLOTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN AJENA

Es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue firmado el 21 de marzo de 1950 y entró en vigor el 25 de julio de 1951, cuyo principal objetivo era la prohibición del tráfico, medidas específicas administrativas y de ejecución, y medidas sociales destinadas a las personas víctimas del tráfico de personas.

Para su creación, la Asamblea consideró que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad

En su artículo 1 se establece que los Estados parte deberán castigar a cualquier persona que, para satisfacer las pasiones de otra, concierte la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de tal persona, explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona.

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA (ABROGADA)



Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007, tenía por objeto la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.

LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, cuyo objeto es: establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y Municipales; establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones; determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; la distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley; establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

En cuyo artículo Décimo transitorio obliga a los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a elaborar las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la esta ley.

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS EN EL ESTADO DE PUEBLA

Ley publicada en la Décima Novena Sección del Periódico Oficial del Estado de Puebla, el lunes 31 de diciembre de 2012, la cual establece en su artículo 2 que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán, aplicarán y darán publicidad



a la misma, a los ordenamientos estatales relacionados con ella, a las acciones, políticas y programas sociales destinados al cumplimiento de los objetivos de dicha Ley.

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado.

En México, las personas más vulnerables son los niños, las niñas, las mujeres y los migrantes indocumentados, entre otros, no obstante lo anterior, no existen estadísticas que nos ayuden a tener una mejor del problema, toda vez que, la tasa de denuncia de este delito es baja

Conforme a lo expuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el uso de las nuevas tecnologías de la información, en particular del Internet, ha adquirido en los últimos años gran relevancia para la captación de las víctimas por el crimen organizado, se estima que el Internet está presente en uno de cada cinco casos de trata de personas; más de 50% de los delitos cometidos vía Internet se relacionan con la pornografía y la trata de menores de edad con fines de explotación sexual; México genera más de 60% de la producción global de pornografía infantil.

A nivel nacional se identifican 363 municipios considerados de alta vulnerabilidad de trata de personas y 464 de vulnerabilidad media, de acuerdo con estimaciones de la PGR, en México existen 47 grupos de delincuencia organizada involucrados en la trata de personas para fines sexuales y laborales.

Las víctimas mexicanas identificadas en el extranjero proceden mayoritariamente de Puebla, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Estado de México.

Puebla, Chiapas, la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California Norte y el Estado de México concentraron 76% del total de las averiguaciones iniciadas en el ámbito local. En estos estados se observa que únicamente la Ciudad de México observa un importante número de sentencias.



De un total de 2,843 víctimas se identificaron las siguientes características: 87.9% son mexicanas y 8.4% extranjeras; 93.4% mujeres y 6.1% hombres; 26.5% son personas menores de edad y 71.7% mayores de edad.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, refiere que la trata tiene serias repercusiones en la salud de los individuos que la sufren o la han sufrido, tales como: mala salud mental, ésta un predominante y persistente efecto de salud adverso asociado con la trata de personas; entre las consecuencias psicológicas figuran depresión; trastorno por estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad; ideas suicidas; y trastornos somáticos, como dolor discapacitante o disfunción física.

MARCO JURÍDICO

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José Costa Rica.
4. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
5. Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.
6. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
7. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
8. Código Nacional de Procedimientos Penales.
9. Código Penal Federal.
10. Constitución Política del Estado de Puebla.
11. Código Penal para el Estado de Puebla.
12. Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla
13. Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
14. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
15. Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
16. Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente.
17. Tesis



Época: Décima Época
Registro: 2019205
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II
Materia(s): Constitucional, Penal, Penal
Tesis: XXVII.3o.96 P (10a.)
Página: 3238

TRATA DE PERSONAS. SI LA VÍCTIMA DEL DELITO ES MUJER, SUS DECLARACIONES DEBEN VALORARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y APLICAR LAS REGLAS SEÑALADAS EN LA TESIS AISLADA 1a. CLXXXIV/2017 (10a.).

Las conductas delictivas previstas y sancionadas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, atentan contra la libertad y seguridad sexual, por lo que si las víctimas del delito son mujeres, se actualiza el deber de juzgar con perspectiva de género, herramienta analítica bajo la cual, conforme a las reglas señaladas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXXXIV/2017 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO.", sus declaraciones deben analizarse tomando en cuenta elementos subjetivos de las víctimas, como la edad, condición social, factores de vulnerabilidad, y el contexto en que se desarrollan los hechos, ya que esas declaraciones constituyen una prueba fundamental sobre el hecho denunciado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 131/2018. 16 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Marycarmen Arellano Gutiérrez.

Nota: La tesis aislada 1a. CLXXXIV/2017 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Tomo I, noviembre de 2017, página 460.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de febrero de 2019 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente protocolo es de aplicación obligatoria y de observancia general para las y los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, y Autoridades de los Ayuntamientos responsables de la gobernabilidad y de la seguridad pública en cada Municipio del Estado, por hechos que ocurran en la jurisdicción Estatal y Municipal.

Artículo 2. Todos los servidores públicos que intervengan con razón del presente Protocolo deben hacerlo respetando estrictamente los derechos humanos y teniendo como prioridad la protección de



la vida e integridad física de las personas. Sin que estén eximidos del cumplimiento de las demás disposiciones legales que en su caso sean aplicables.

OBJETIVO

Artículo 3. Establecer las acciones coordinadas que deberán llevar a cabo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, y Autoridades de los Ayuntamientos que conforman el Estado de Puebla, cuando tengan conocimiento de una víctima de trata; así como establecer los parámetros y condiciones mínimas que permitan diferenciar y definir el uso de las técnicas y tácticas aplicables al caso de que se trate.

GLOSARIO

Artículo 4. Para los efectos del presente Protocolo, se entenderá por:

I. Abuso de poder: en materia de trata se interpreta como la facultad de dominio o control que el tratante puede tener sobre la víctima por su relación social, laboral, de parentesco o vínculo legal, especialmente con las personas menores de edad o personas con incapacidades o discapacidades. Aplican desde el punto de vista social o cultural los lazos de poder de hombres sobre mujeres y la relación de los padres y madres sobre los hijos e hijas cuando se hace uso ilegítimo de la patria potestad para obligarles a hacer actos que van contra su bienestar y derechos humanos. Este medio se incluye usualmente dentro del tipo penal de trata de personas.

II. Agresor: persona que lesiona los intereses jurídicamente protegidos, especialmente la integridad física o la vida.

III. Amenaza: es una forma de coacción. Implica manifestar la intención de provocarle un daño a otra persona que se expresa con actos o palabras. En materia de trata de personas, los tratantes utilizan con mucha eficacia el medio de la amenaza para obtener el control sobre las víctimas y obligarlas a realizar sus objetivos.



IV. Autoridad Municipal: el Presidente Municipal, Presidente de la Junta Auxiliar, Regidores, Síndicos, el Titular del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal respectivo, cualquiera que sea la denominación del cargo y los integrantes del Consejo Municipal.

V. Captación: atraer a una persona, llamar su atención o incluso atraerla para un propósito definido. En lo que respecta a la trata de personas tiene un significado muy similar. Presupone reclutamiento de la víctima, atraerla para controlar su voluntad para fines de explotación.

VI. Coacción: implica fuerza, intimidación o violencia para que una persona diga o ejecute algo. Los tratantes ejercen este medio sobre las víctimas utilizando diferentes elementos generadores: la posibilidad de ejercer un daño directo y personal o la amenaza de afectar a otras personas.

VII. Consentimiento: exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones.

VIII. Engaño: se refiere a crear hechos total o parcialmente falsos para hacer creer a una persona algo que no es cierto.

IX. Estrategia: plan ideado para dirigir una acción respecto de un hecho, designando el conjunto de reglas que buscan un resultado óptimo.

X. Explotación: es la obtención de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación ajena de otra persona en actos de prostitución, servidumbre sexual o laboral, incluidos los actos de pornografía y la producción de materiales pornográficos.

XI. Extracción ilícita de órganos: se entiende como la sustracción de un órgano humano sin aplicar los procedimientos médicos legalmente establecidos y sin que medie consentimiento de la víctima, en la mayoría de los casos.

XII. Fiscalía: Fiscalía General de Estado.

XIII. Medidas de protección: son las acciones o los mecanismos tendientes a salvaguardar la vida, la integridad personal, la libertad y los demás derechos de la persona. Pueden ser acciones ordinarias encaminadas a preservar la identidad y localización de las personas protegidas o



extraordinarias para brindarles seguridad integral a las personas protegidas, de manera temporal o definitiva ante condiciones de extremo peligro o riesgo.

XIV. Orden Público: observancia de las reglas mínimas de convivencia social que permiten el desarrollo armónico de los integrantes de una comunidad.

XV. Primer Respondiente: personal de las instituciones de seguridad pública (instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal) que sin perjuicio de la división o especialización a la que pertenezca, asume la función de intervenir primero ante un hecho probablemente constitutivo de delito, conforme a la normatividad que le aplique.

XVI. Región: división territorial del Estado de Puebla en seis zonas estratégicas para la operación de la Secretaría de Seguridad Pública.

XVII. Secretaría: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

XVIII. Trata de Personas: acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a amenazas, al uso de la fuerza y otras formas de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

Artículo 5. Los principios que rigen este Protocolo son los siguientes:

- I. Respeto irrestricto a los derechos humanos.
- II. Proteger la vida e integridad física de las personas.
- III. Garantizar, mantener y restablecer el orden público y la paz social.



IV. Perspectiva de género.

V. No re victimización.

VI. Confidencialidad de la información que proporcione la víctima.

VII. No discriminación.

VIII. Debida diligencia en la actuación de las autoridades.

DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE INTERVENCIÓN

Artículo 6. Tanto la Autoridad Municipal y la Secretaría, designarán al servidor público responsable de intervenir en los hechos de los que han tenido conocimiento, para acudir al lugar de los hechos.

INFORMACIÓN NECESARIA

Artículo 7. Es obligación del Policía Primer Respondiente informar detalladamente al Agente del Ministerio Público los pormenores del lugar y la naturaleza de los hechos.

INVESTIGACIÓN

Artículo 8. Ante la denuncia de que una persona está siendo víctima de trata, el primer respondiente deberá recabar la mayor cantidad de datos, como: edad, sexo, nacionalidad y formas de explotación.

ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD

Artículo 9. Una vez que ha sido identificada la persona víctima de trata, el primer respondiente deberá brindar auxilio inmediato en el lugar donde se localice la víctima, en el momento de solicitarlo; debe darle acceso a servicios de protección, privilegiando la seguridad del bien superior tutelado, como lo es la protección de la vida de la víctima y el resguardo de su integridad física.



Además, el primer respondiente tiene la obligación de:

- a) Llamar inmediatamente a los servicios médicos para que hagan una valoración de la salud de la persona víctima de trata, con la finalidad de determinar cuál será el siguiente paso a seguir (presentación de la denuncia ante Agente de Ministerio Público o trasladarla a un nosocomio para que sea atendida a la brevedad posible).
- b) Evitar en todo momento la revictimización, entendiéndose por esto, cualquier actitud del servidor público que tienda a minimizar, tergiversar, negar o reiterar la explicación del reclamo original de la víctima de trata.
- c) Atender por igual sin distinción por su condición de origen étnico o racial, edad, credo, nivel económico, nivel social, escolaridad, capacidades diferentes, nacionalidad, actividad profesional, orientación o preferencial sexual, y de cualquier otra diferencia, a las personas víctimas de trata.
- d) Recibir testimonios o declaraciones de personas, en relación al delito de trata.
- e) Efectuar inspecciones, examinar objetos y lugares.
- f) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos.
- g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios.

GARANTÍAS DE LA VÍCTIMA

Artículo 10. El primer respondiente, además de brindar atención inmediata a la víctima, deberá explicarle que tiene derecho a: la seguridad, la privacidad y la representación legal; explicándole claramente cuál será el procedimiento a seguir y respetar en todo momento la decisión de la víctima.



En virtud de estos derechos, las víctimas de trata deberán recibir determinados beneficios independientemente de su situación en materia de inmigración o de su voluntad de declarar en los tribunales.

DOCUMENTACIÓN DE LUGAR Y HECHOS

Artículo 11. El primer respondiente, generará un archivo (fotográfico, de video y cualquier otra información que resulte de utilidad), a fin de fijar los hechos y en su caso hacer costar que su actuar fue en estricto apego a los Derechos Humanos.

PUESTA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 12. En caso de que exista algún detenido por el hecho catalogado como delito, el Policía Primer Respondiente deberá actuar conforme lo marca el “PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN. PRIMER RESPONDIENTE”, deberá resguardarlo para evitar una posible fuga y/o que siga ejerciendo daño a la víctima, para que posteriormente sea puesto a disposición del Ministerio Público; exhortando a la víctima a presentar la denuncia correspondiente.

Una vez realizado lo anterior, se derivará a la víctima a la instancia correspondiente.

INVESTIGACIÓN DE HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO

Artículo 13. La investigación de los hechos cometidos que tengan apariencia de delito, estarán a cargo de la Fiscalía, quien sin demora deberá realizar las diligencias necesarias con el apoyo de las autoridades que intervinieron.

ACCIONES POSTERIORES A LOS HECHOS

Artículo 14. Las autoridades intervinientes en los hechos, deberán recabar la información correspondiente y rendir informe inmediato a sus superiores jerárquicos.

TRANSITORIOS



PRIMERO. El presente Protocolo entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Entrando en vigor el presente Protocolo, quedarán sin efectos los suscritos anteriormente.

TERCERO. Independientemente de la publicación del presente instrumento, se ordena comunicar a todas las Autoridades mencionadas en este Protocolo, a través de oficios y circulares, según corresponda, para su conocimiento y aplicación.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

A 26 DE ABRIL DE 2019

**MAESTRO MANUEL ALONSO GARCÍA
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA**